

Macroeconomía : el impacto del neoliberalismo en la Argentina
Fernando Ausas ... [et al.] ; (comps.); prólogo de Axel Kicillof.
1a ed . - Los Polvorines : Universidad Nacional de General Sarmiento
Avellaneda : UNDAV Ediciones, 2018.

La Economía Social latente.

10 Desafíos para la Economía Política en la Argentina¹

Por Inés Arancibia

Lic. en Trabajo Social (UBA), Mgter en Economía Social (UNGS)
Investigadora Docente en Sistemas Económicos Urbanos (UNGS)
y Planificación Social y Territorio (UNPAZ)

Introducción

Las políticas denominadas de “economía social” a partir del 2003, ante la necesidad de afrontar un nivel de pobreza sin precedentes (50%) y una desocupación que había alcanzado al 20%, ubicaron a los planes y programas de Economía Social como una de las herramientas más significativas del modelo de Desarrollo con Inclusión. Este modelo hizo posible que en 12 años se pudiera aumentar el trabajo registrado en un 60% y reducir la desocupación al 6,9%².

Pero, a pesar de los amplios logros en este sentido, este modelo ha generado una particular instalación de la Economía Social como si fuera un “sector” diferenciado de nuestra sociedad, de carácter marginal, de supervivencia y refugio, asociado a la pobreza, la informalidad, la precariedad, la baja escala y poca o nula generación de excedentes.

Esta suerte de ghetización de la economía social como “sector” residual de los trabajadores estuvo, además, caracterizado en su composición por determinados actores sociales a los que se le preasignaron determinados valores como la “solidaridad” y la “igualdad”, y prácticas específicas como la asociatividad, la democracia y la cooperación, y a quienes se acompañó fundamentalmente desde políticas sociales, es decir, desde políticas redistributivas, sin

¹ Versión corregida y autorizada de la ponencia “La Economía Social latente. Desafíos desde la Economía Política en la Argentina”, presentada en el Primer Congreso de Economía Política de EPPA (Economía Política para la Argentina), Universidad Nacional de General Sarmiento, Los Polvorines, agosto 2016: “La Economía Social latente. Desafíos desde la Economía Política en la Argentina”.

² LA MACROECONOMIA ARGENTINA, DICIEMBRE 2012, Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo, <http://www.mecon.gov.ar/basehome/pdf/indicadores.pdf>

incidencia en la matriz productiva y de comercialización de la economía, ni modificar las lógicas y las prácticas de los actores económicos hegemónicos, de quienes este “sector” sigue siendo dependiente.

Por otro lado, la embestida neoliberal que actualmente no sólo atravesamos en la Argentina sino que amenaza regionalmente a nuestros gobiernos populares latinoamericanos, trae de la mano una profundización del individualismo microempresarial, del “espíritu emprendedor”, de la motivación y la iniciativa personal como herramientas privilegiadas para “cumplir el sueño” de ser “dueño de tu propio negocio”, enfrentando a la competencia en el mercado, propuesta de fácil infiltración en nuestro aún contradictorio mundo del trabajo.

Me propongo en este breve trabajo compartir reflexiones, en torno algunos aprendizajes que no podemos olvidar y desafíos pendientes que no podemos eludir, en relación a lo que se dio en llamar “la Economía Social” durante los últimos 12 años, gracias a la apuesta arriesgada, valiente, de reorientar algunas políticas públicas hacia un enfoque de políticas socioeconómicas en el marco de una convulsionada, vulnerable y urgente Argentina pos 2001, apoyando y potenciando las estrategias autorganizativas existentes de las/los trabajadores frente a la crisis.

Las reflexiones propuestas, lejos de agotar los posibles respecto al tema, asumen deliberadamente su pretensión provocadora, tan necesaria para estimular una crítica reflexiva y compañera. También, los pequeños aportes de este trabajo se posicionan desde una primera persona del plural, un “nosotros” bastardeado, golpeado, pero que nunca dejó de estar de pie, y que no pretende distinguir responsabilidades, culpas, ni reavivar acusaciones, sino que convoca a asumirnos como parte de un colectivo, a veces inorgánico, otras fragmentado, a veces más organizado, que acumula muchos logros, grandes aprendizajes, convicciones firmes, así como frustraciones, por nuestras propias diferencias en las perspectivas teóricas, políticas y organizativas. Prefiero compartir esta reflexión desde ese “nosotros” que se animó a probar, que puso el cuerpo y el corazón, que intentó, que muchas veces pudo y, otras, no pudimos.

Nos posicionamos desde la defensa de un proyecto de país inclusivo, solidario, soberano, que orienta todas sus herramientas para la justicia social, la ampliación constante de derechos económicos sociales y culturales y la defensa de los derechos humanos, en el marco del desarrollo y creciente emancipación de nuestra Patria Grande.

En este marco, comparto un pequeño aporte para nuestra tan deseada construcción colectiva de una Economía Social que pueda volver a ser parte de un Proyecto Nacional y Popular, de un Desarrollo Inclusivo que, confiamos, vamos a volver a poner al servicio de nuestra Patria.

Los Datos opacos de la economía Social ¿Cuántos son?

El debate que nos proponemos es en términos fundamentalmente políticos en torno a lo que conocemos como “la Economía Social” en sentido amplio, tanto como enfoque teórico, como propuesta de política socioeconómica y como sector social que se constituye como sujeto de esas políticas.

¿Qué dimensiones alcanzó este sector? ¿Por qué decimos que es necesario potenciarlo? Desde distintos espacios hemos recibido esta pregunta y nos la llevamos como una espina incómoda. No tenemos los datos para dimensionar lo que queremos defender y promover. Otros sectores de la economía sí los tienen y pueden disputar mucho mejor, al poder visibilizar su aporte a la economía, su reconocimiento y valoración. Sin embargo, cuando hablamos de Economía Social no logramos tener, en principio, un criterio de definición común para saber “qué sumar”. Y cuando lo conseguimos, no tenemos datos de la mayoría de los actores, los criterios de registro se superponen, las variables se solapan, las bases de datos reales no están actualizadas o no registran datos comparables, entre otros aspectos. Para resolverlo, forzamos los datos, tratamos de que ejemplifiquen lo que queremos demostrar, y no lo que realmente reflejan, realizamos inferencias temerarias, o trabajamos en paralelo, desgastando esfuerzos en una tarea de dimensiones inabordables para un trabajo solitario.

Nuestros datos sobre la totalidad del sector se convierten en opacos, poco creíbles en el marco de las disputas que queremos dar. ¿Cuántas experiencias son? ¿Qué aporte al PBI realizan? ¿cuánto producen? ¿De cuántos trabajadores, de cuántas familias estamos hablando?

En este sentido, una estimación posible es a partir de la cantidad de “puestos de trabajo” en sentido amplio, que fueron generados en este sector en el período al que nos referimos. En base a evaluaciones de los Ministerios de Desarrollo Social y Trabajo en el 2015, es posible estimar que entre un 8 y un 10% de los 5 millones de puestos de trabajo creados en los 12 años de gobiernos kirchneristas, fueron generados en el marco de estas políticas de promoción de capacidades de trabajo familiares, autogestivas y asociativas y cooperativas, es decir, las llamadas políticas de Economía Social. Veremos más adelante en qué se sustenta esta estimación, para tomar dimensión de la escala socioeconómica del sector al que nos referimos.

Veamos al menos, si esto puede considerarse fácil de comprobar y si nos permite usarlo como indicador de aproximación a la dimensión alcanzada por la llamada Economía Social, y de esa forma inferir el potencial que puede tener en relación a su impacto en toda la economía, a partir del trabajo y la producción asociativas.

Lo que intentamos. La Asociatividad inclusiva

En principio, en cuanto a las políticas públicas, partamos de una idea base: aquellas políticas llamadas “de Economía Social” significaron una apuesta arriesgada frente situación socioeconómica provocada por las políticas neoliberales de los años 90, agudizadas por las crisis del 2001 - 2002 que, en materia de política social, habían reducido a la mínima expresión las prestaciones sociales, potenciando “un proceso de de-socialización rechazo frente a las grandes políticas institucionales en materia de desarrollo social” (Danani, 2016). Una de las propuestas fue la orientación de instrumentos (necesarios) de asistencia hacia otros dispositivos que incluían elementos de promoción de la capacitación laboral y la puesta en juego de capacidades asociativas para la gestión de recursos y el trabajo en producción y servicios, iniciando de esta forma una compleja y sinuosa transición hacia políticas socioeconómicas (denominadas de Desarrollo Local de Economía Social, de Inclusión, de Cooperación, de Financiamiento Solidario, entre otras) de amplio alcance social. Esto significó un gran avance en el reconocimiento de derechos económicos de la población que veía amenazada su posibilidad de generar ingresos a través del *trabajo*, y que no podía esperar a que el “mercado” generara una demanda de *empleo* capaz de absorberla.

Esto fue posible gracias a un Estado Nacional presente, (y con Estados provinciales y municipales replicando sus iniciativas, tema que requiere aún una evaluación crítica de los logros y dificultades), principalmente a través de políticas de apoyo a las ya existentes estrategias de trabajo asociativo de nuestra tan golpeada clase trabajadora, lo que se llamaban los trabajadores “informales” o “cuentapropistas” de la economía popular, transformando capacidades de trabajo aisladas en experiencias asociativas y cooperativas que facilitarían la inclusión sociolaboral. El componente asociativo en las estrategias laborales, más allá de las hasta entonces experiencias del campo del cooperativismo, no era un aspecto atendido por las políticas públicas.

Desde el Estado se promocionó la generación de experiencias de trabajo, entendiéndolo como “ordenador social y estrategia de inclusión”, a partir de programas de generación de empleo (planes y programas socio productivos y sociolaborales), como “Ingreso Social con Trabajo” y sus antecesores.

Durante el kirchnerismo también se generaron políticas de apoyo hacia los actores de la “economía social tradicional” existente, con una larga trayectoria asociativa en nuestro país, como las Cooperativas y Mutuales de distintos perfiles y sectores de actividad de la economía, que con sus contradicciones y heterogeneidades, se sumó aportando su experiencia centenaria

al proceso de fortalecimiento de la Economía Social en nuestro país. En esta última década, el sector cooperativo, no sin contradicciones, fue ampliando sus herramientas de apoyo a nuevas expresiones como las Empresas Recuperadas (que tomaron mayormente la forma organizativa cooperativa) y una amplia gama de organizaciones sociales asociativas y autogestionadas.

Esas nuevas expresiones, en nuestro país hijas directas de la crisis del 2001³, como respuesta a los cierres de fábricas, quiebras y vaciamientos empresarios, dieron lugar a los primeros espacios de representación con lógica sindical de trabajadores autogestionados, como los Movimientos de Empresas y Fábricas Recuperadas por sus trabajadores, que sostuvieron y ampliaron miles de puestos de trabajo, con reconocimiento nacional e internacional, en sus variadas expresiones políticas y organizativas, mayormente cooperativas.

A marzo de 2016, existían en la Argentina 367 empresas recuperadas, que ocupaban a 15.948 trabajadoras/es, de las cuales casi el 75% se ubica en la región metropolitana de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba⁴ (Ruggieri, 2016). Desde el Estado, y no sin numerosos tropiezos, se promovió su financiamiento, reconocimiento y legalización, para que puedan disputar con otras empresas, pero con ingresos dignos y excedentes para la reinversión, llegando incluso muchas de ellas a poder exportar.

Los datos del sector cooperativo son poco claros en este sentido, salvo los que reflejan realidades parciales, complejizando su dimensionamiento conjunto. Es un desafío pendiente saber realmente cuantas cooperativas realmente existentes hay y cuantos puestos de trabajo generan, debido entre otros aspectos a la propia heterogeneidad del sector, a las categorías de lo que se considera un “empleado” o un “socio” y a las fragmentaciones institucionales que se reflejan en las bases estadísticas públicas y privadas difícilmente integrables. Sin pretender resolver esta vacancia, a partir de los datos disponibles podemos estimar en términos generales algunas cuestiones. Este sector registra a principios de 2017 unas 34.159 cooperativas activas. Si tenemos en cuenta que cerca de 16 mil corresponden a cooperativas de Planes de Inclusión como el “Ingreso Social con trabajo” (sólo en el Programa Argentina Trabaja se incluían a

3 Las primeras experiencias de autogestión de empresas y fábricas, aunque promovidas desde el Estado, se conocieron a nivel mundial en la Yugoslavia de Tito (1950 y 1973) y en el Perú durante el gobierno de Velazco Alvarado (1968-1975). CTA, Espacio de Economía Social, (2009)

4 Datos tomados de los relevamientos sistemáticos que realiza en el sector el equipo del Programa Facultad Abierta dirigido por Andres Ruggieri, en su último informe “Las empresas recuperadas por los trabajadores en los comienzos del gobierno de Mauricio Macri”, ESTADO DE SITUACIÓN A MAYO DE 2016. <http://www.idelcoop.org.ar/sites/www.idelcoop.org.ar/files/revista/articulos/pdf/reflexiones-01.pdf>

159.215 trabajadoras/es⁵, con un promedio de 10 trabajadores/as cada una), y sin contar las 367 Empresas Recuperadas (mayoritariamente cooperativas, y que sí tienen registros más confiables), podemos inferir que sólo el resto de las experiencias cooperativas registradas, unas 17.800, podrían estar ocupando a unos 250 mil trabajadores/as⁶.

Si además tenemos en cuenta que de esas otras 17.800 cooperativas existentes, unas 13.500 fueron creadas también después del año 2003, y estimando (en forma bastante poco ambiciosa), un promedio de 15 trabajadoras/es por cada una, estamos hablando de más de 200 mil puestos de trabajo más. Sumado a nuestro recuento estimativo anterior (Cooperativas Argentina Trabaja y Empresas Recuperadas), estamos ya hablando de casi 400 mil de puestos de trabajo creados sólo en el sector cooperativo formalizado en sus diferentes modalidades.

Los límites de este cálculo aproximado, además de los ya mencionados, son los de la imposibilidad de tomar como referencia a la monotributo social (que es un registro impositivo de una heterogeneidad de formas de trabajo), la dificultad de incluir los socios de las mutuales ya los empleados de éstas y de las propias cooperativas, muchas de las cuales pueden tener empleados en relación de dependencia además de los socios.

5 Para ampliar datos de balance del propio Ministerio de Desarrollo Social hasta el 2015, recomendamos la lectura del informe presentado ese año a la Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas. <http://enaun.mrecic.gov.ar/node/5121>, fecha de consulta: 1/3/2017.

6 El sector cooperativo argentino, con toda la heterogeneidad de sus expresiones de actividad y tamaño, registra 34,159 cooperativas activas a febrero 2017, según el INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social), de las cuales 3184 son previas a la crisis del 2008 (el 9,3%), unas 1073 cooperativas de las actualmente existentes fueron creadas entre 1999 y mayo 2003 (3%) y un amplísimo número de 29,902 (el 87,5%) fueron creadas entre 2003 y 2016. Cabe aclarar que este dato refleja no todas las creadas en los periodos mencionados, sino sólo las que subsisten hasta la actualidad. <http://www.inaes.gob.ar/Entidades/BuscarEntidades> , consultado 1/7/2017.

Se estima que de las 29,909 cooperativas activas a enero de 2017 “casi 16 mil fueron originadas por programas sociales con clara preeminencia de los programas de Desarrollo Social, como el denominado “Argentina Trabaja” (con aproximadamente 106 mil beneficiarios a 2016) y “Ellas Hacen” (con 81mil beneficiarias a 2016)”, según sostienen Lorena Putero y Juan Cruz Contreras en un excelente trabajo de sistematización de las políticas de apoyo a la Economía Social (2016).

Estimación de puestos de trabajo generados formalmente es experiencias asociativas registradas (cooperativas) en el período 2003-2015			
Tipo de Cooperativa	Cantidad de experiencias	Referencia pomedio de trabajadores	Puestos de trabajo
Cooperativas Ingreso Social con Trabajo: Argentina Trabaja y Ellas Hacen *	16.000	10	160.000
Empresas Recuperadas **	367	43	15.948
Otras Cooperativas ***	13.500	15	202.500
Total			378.448
<i>Elaboración propia en base a las fuentes citadas</i>			
<i>Fuentes: Ministerio de Desarrollo Social*, Programa Facultad Abierta**, INAES***</i>			

Si a esta base de registro formalizado le agregamos una cantidad indefinida y muy heterogénea de emprendimientos autogestionados asociativamente en el ámbito urbano y rural, no formalizadas laboral y jurídicamente como tales (aunque sus miembros sí estén registrados en los regímenes impositivos amplios como el Monotributo Social y su versión agropecuaria ⁷) podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la cantidad de puestos de trabajo generados bajo estas formas asociativas de trabajo, en sus variadas expresiones, no están muy lejos de 500 mil correspondientes al 10% de los 5 millones de puesto de trabajo generados entre el 2003 y el 2015.

¿Cuál la incomodidad que encierra este dato y que afecta su defensa y legitimación? Es claramente el dilema de la *calidad de ese trabajo*, sus condiciones y derechos exigibles en un mundo laboral donde la cultura del trabajo heredada de generaciones anteriores, producto de luchas del movimiento obrero fundacional y de proyectos políticos de país sostenido por el peronismo, hacen legítimamente aspirable un conjunto de derechos a las que ningún trabajador debiera renunciar. La terciarización laboral, la precarización, y las relaciones laborales de dependencia encubierta, entre otros aspectos, son parte del riesgo que se asume desde este tipo de formas de trabajo, que no deben eludirse. Este tema sensible en términos políticos exige

7 La dificultad de este registro de Monotributo y Monotributo Social (con más de 700 mil trabajadores activos a fines del 2014, según el trabajo de Putero y Contreras 2016, ya citado) radica en que solo refleja inscripción a un régimen impositivo sin distinguir en todos los casos la pertenencia a un grupo asociativo de trabajo o producción.

para la economía política un debate propositivo serio en pos de jerarquizar el trabajo asociativo en nuestra economía.

También se fomentó la creación de ámbitos de conocimiento, investigación y formación (diplomaturas, tecnicaturas, maestrías, especializaciones, programas de vinculación tecnológica, etc.) con la participación activa de las Universidades Nacionales existentes y las 10 nuevas creadas, promoviendo un debate y articulación con el territorio y sus organizaciones, jerarquizando los saberes y competencias de los trabajadores autogestionados. Proliferaron numerosos estudios académicos desde variadas perspectivas teóricas y disciplinares sobre las nuevas formas de organización del trabajo empresarial gestionado por trabajadores sin patrón, sobre los impactos de las políticas de inclusión sociolaboral, sobre las potencialidades y límites de la promoción de la asociatividad, sobre la gestión asociativa de emprendimientos socioeconómicos, entre otros aspectos. Muchas de las Universidades, gracias a las herramientas de promoción de articulación Universidad y Economía Social, ampliaron los recursos y las iniciativas conjuntas de formación, investigación, extensión y asistencia técnica, articulando en Red las potencialidades de los variados territorios universitarios⁸.

Otro aspecto no menor en la construcción del sector han sido, y siguen siendo, las organizaciones autogestionadas de consumo. Teniendo en cuenta la importancia de la participación del consumo de los hogares en el PBI (que en 2015 llegó al 65,7%, según el BM), y que el consumo de las familias va de la mano del poder de compra de sus salarios e ingresos y de las posibilidades de acceso a los bienes y servicios, se organizaron desde distintos espacios territoriales, ferias y mercados de variados perfiles, y experiencias de escala en la organización de consumidores, que advirtieron la potencialidad de la asociatividad y la cooperación para disputar la lógica de la distribución y consumo final de alimentos y otros productos de producción regional. Estas federaciones, cooperativas y colectivos de consumidores⁹ pudieron adentrarse, al

8 Un ejemplo de esto es la amplia variedad de Foros, Congresos, encuentros y experiencias de desarrollo territorial impulsados por las Universidades que trabajan promoviendo la Economía Social. Una de sus expresiones es la RUESS, Red Universitaria de Economía Social y Solidaria. (<http://www.ruess.com.ar/>)

9 Muchos de estos colectivos avanzaron hasta conformar espacios políticos de interlocución con el Estado para demandar mayor reconocimiento y protección de la participación cooperativa y asociativa en las cadenas de valor alimentarias y en defensa de la soberanía alimentaria. Una de sus expresiones de mayor escala fue el intento de conformar la Mesa de Federaciones de Cooperativas Productoras de Alimentos de la República Argentina. Declaración del Congreso Nacional de Federaciones de Cooperativas Productoras de Alimentos Predio del

menos un poco, en la concentrada matriz de distribución de productos finales de nuestra economía, ensayando diferentes lógicas asociativas, con apoyo de las políticas públicas en forma directa o indirecta, para facilitar el acceso a bienes y servicios regionales de pequeños y medianos productores y cooperativas a las regiones metropolitanas, ampliando las posibilidades de desarrollo de los productores y de los propios consumidores.

De la Economía Social inclusiva y solidaria al Emprendedorismo del “sálvense quien pueda”

El proyecto neoliberal y conservador del macrismo, ¿qué proyecto tiene para la Economía Social? Por lo pronto, su concepción frente a la necesidad de “promoción” del empleo, la economía y la producción es diferente a la de la “inclusión”. Para el Gobierno de la Alianza Cambiemos, Macri y su proyecto de país excluyente, regresivo en derechos, el empleo y la producción son promovidos desde un enfoque ideológico opuesto, con otro discurso y otras propuestas de política pública.

De la mano del desmantelamiento de los recursos del Estado, especialmente a partir del despido de sus trabajadores, (equipos técnicos especializados, con experiencia y derechos laborales de estabilidad) y del vaciamiento y/o eliminación de los planes y programas de inclusión socioeconómica y laboral, sumado a las políticas de ajuste, devaluación, tarifazo y apertura de importaciones, (por nombrar sólo algunas), se suma el abandono de las herramientas de apoyo al sector autogestionado, cooperativo, mutualista y, en definitiva, a toda iniciativa *popular, asociativa, de trabajo autogestivo* que se haya forjado con esfuerzo de los trabajadores, sus familias y comunidades, y el Estado en la última década. La intención es no sólo borrar el enfoque de “Economía Social” de las políticas (manteniendo algunos conceptos decorativos pero vaciados de contenido, como lo expresan los Manuales de la actual gestión¹⁰), sino también perseguir con ahogo de recursos a toda experiencia cooperativa que con su escala y buenos resultados en términos de empleo e ingreso, pueda poner en riesgo la demostración fáctica de que la empresa es el único actor económico posible en nuestra sociedad.

Centro Nacional de Recreación(Ce.Na.Re) del Ministerio de Desarrollo Social, realizado en los Bosques de Ezeiza, Buenos Aires, 3 y 4 de Julio de 2015. <http://www.alimentoscooperativos.org>

¹⁰ Al respecto véase las Cartillas Emprender, Innovar y Asociarse, para capacitación de Emprendedores del Ministerio de Producción de la Nación, Programa Nodos de Innovación Social y Emprendedorismo, 2016.

El macrismo apela directamente a un enfoque más acorde a su perfil “ceocrático” con la reaparición contundente de un discurso sobre el “emprendedorismo”, promoviendo la competencia entre individuos, sueltos, como “empresarios” para posicionarse mejor frente a “nichos” de preferencias de los clientes, para identificar lo que “el mercado manda”.

Sobre este tema, debemos reconocer que gran parte de los paquetes teóricos y metodológicos del mundo “emprendedor” propios del instrumental de la microeconomía neoclásica, estaban ya presentes, muchas veces acriticamente, en algunos instrumentos de las políticas públicas, siendo más visibles en la “capacitación”, en los “manuales” de Economía Social, a través de dispositivos para el uso del “cálculo” de costos, en los que se incluía la “mano de obra”, los precios “de mercado”, los planes de negocios y los “flujos de caja”, entre otros, y sobre lo que nos debemos una revisión colectiva de las herramientas utilizadas y sus efectos (Arancibia, 2015).

Sin embargo, el macrismo profundiza estas herramientas desempolvando el “sálvense quien pueda” en el trabajo, y aplicando instrumentos que en su “publicidad política” le ha generado resultados positivos: una vuelta a la oportunidad individual, el poder “cumplir tu sueño”, las motivacionales de autoayuda y apoyo personal a “tus” potencialidades (el coaching empresarial). Pero, sobre todo, despolitizando las condiciones que hacen posible cumplir un “sueño” personal para insertarse en la economía, sometiendo a los trabajadores a las “leyes” del mercado, asumiendo como responsabilidad casi exclusiva del individuo en el éxito o fracaso de su “empresa”, incentivando la competencia con otros trabajadores en la misma situación.

Todo esto, en un contexto en el que, desde que asumió el actual gobierno, viene demostrando su eficacia abrumadora en expulsar trabajadores del mundo del trabajo, someténdolos a la incertidumbre de la sobrevivencia, aspecto valorado como positivo por uno de sus más obsecuentes funcionarios¹¹. Se promulga que Argentina debe “crecer” en sus números macro sin importar quien se apropia los beneficios de ese crecimiento.

La Economía Social no esta exenta de ser atravesada por el debate político del proyecto de país que queremos, para nosotros y para las futuras generaciones. En los últimos años, nuestro país

11 Frase del Ministro de Educación de la Nación del macrismo, Esteban Bullrich, durante el llamado “Mini Davos” en Buenos Aires, en el Centro Cultural Néstor Kirchner: *“El problema es que nosotros tenemos que educar a los niños y niñas del sistema educativo argentino para que hagan dos cosas: O sean los que crean esos empleos, que le aportan al mundo esos empleos, generan, que crean empleos... crear Marcos Galperin (fundador de Mercado Libre) se escuchan risas- o crear argentinos que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla.”*<http://www.eldestapeweb.com/bullrich-polemico-debemos-crear-argentinos-capaces-vivir-la-incertidumbre-y-disfrutarla-n25745>

se debate, cuerpo a cuerpo, entre dos fuerzas políticas que apuestan, por un lado, a un *desarrollo con justicia social*, es decir, con la inclusión de las mayorías populares en la distribución de la riqueza generada a partir de su propio trabajo, con fuerte presencia del Estado acompañando y equilibrando las injusticias estructurales, identificando y regulando los recursos en función de las necesidades sociales a resolver (también desde el consumo) y no dejándolas libradas a los designios del “mercado”. Por el otro, quienes advierten, desde los orígenes de nuestra Nación, que el crecimiento es para pocos, y las necesidades que debe resolver el Mercado (con ayuda del Estado como garante de sus negocios) son las de los ricos, donde se benefician los mismos de siempre (los que pretendieron fundar nuestra nación en base al enriquecimiento oligárquico y agroexportador y a la explotación de un trabajo sin derechos). Estos últimos van a insistir política, económica y mediáticamente en sus propósitos hegemónicos.

En este debate político que nos proponemos encarar, en función de estos dos modelos de país en pugna (que reflejan dos proyectos de desarrollo económico y social sobre qué lugar merecen tener en nuestra economía la producción, el trabajo y el consumo de los trabajadores) no podemos, sin embargo, dejar en el camino el necesario debate sobre el alcance y el sentido alcanzado por la Economía Social en nuestro país, y las proyecciones de lucha y resistencia por los derechos conquistados, tanto a nivel teórico, político como a nivel organizativo de los actores que la conforman.

La Economía Social latente

Pese a su escala alcanzada (nunca acabadamente dimensionada y cuantificada), la Economía Social en la Argentina sufrió la particular instalación como un “sector” diferenciado de nuestra sociedad, de carácter marginal, de supervivencia y refugio, asociado a la pobreza, la informalidad, la precariedad, la baja escala y poca o nula generación de excedentes. A pesar de los avances logrados, la Economía Social sufrió las limitaciones de su propio estigma de ser promovida por una política social (y, por lo tanto, redistributiva y asistencial), lejos de las políticas de desarrollo económico, con un techo en nuestra propia matriz productiva y distributiva de la economía.

La Economía Social puede fortalecerse asumiéndose como estrategia en esta lucha contra hegemónica, demostrando su capacidad de ampliar la base de acceso a los derechos económicos, sociales y culturales sin renunciar a la calidad de la producción ni a las condiciones

de trabajo “legítimamente aspirables” socialmente, promoviendo el derecho a la participación económica de los trabajadores en la producción y distribución de la riqueza.

Con esto nos referimos a que la Economía Social puede ser (y debiera ser) una herramienta de política económica, inclusiva, democratizadora, (alejándose de las matrices de la política social, sobre todo de las modalidades asistenciales) como parte de la estrategia política para disputar el sentido de toda la economía ya iniciada en el 2003. Su potencial radica en su capacidad de generar los espacios, las herramientas concretas para la gestión integral y participativa de los recursos materiales que dispone la sociedad, propiciando formas innovadoras de acceso al trabajo digno, asociativo y solidario, a productos de calidad a precios justos, a formas asociativas reconocidas de resolver necesidades cotidianas, al financiamiento y la formación para el desarrollo y al consumo responsable que fortalezca el mercado interno y la producción local, desentrañando las necesidades y potencialidades del consumo popular (¿quién asegura sus satisfacción con calidad y justicia si no es el Estado?) y desarrollando nuevos patrones culturales para el acceso soberano y justo a los bienes y servicios legítimamente aspirables en nuestra sociedad.

Entre los aspectos más relevantes a revalidar de la Economía Social es acerca de las modalidades de aquellos más de 400 mil puestos de trabajo generados, para acercarlo en sus aspiraciones de derechos a los demás trabajadores activos, democratizando los derechos laborales, actualmente restringido a los trabajadores asalariados formales con posibilidad de ser mediados por estructuras sindicales y en el marco de relaciones de dependencia con un empleador público o privado. ¿Hasta dónde pueden correrse esos límites entre trabajadores asalariados (empleados) y trabajadores autogestionados y asociativos sin relación de dependencia? ¿por qué debe ser el único (o al menos el más efectivo) requisito de inclusión a los regímenes públicos y solidarios de seguridad social?

En este marco imperioso de reflexión política para la acción colectiva, con miras a recuperar el Estado al servicio de las necesidades del Pueblo, debemos provocarnos a un debate compañero y militante sobre nuestros “aciertos” y nuestras “deudas” para construir la economía social que necesitamos en la Argentina, para volver a ser Gobierno, fortalecer nuestro Estado para la inclusión todas y todas las y los argentinos.

En este sentido, ¿Qué transformaciones económicas necesitamos para que la Economía Social sea una herramienta activa e inclusiva de trabajo y producción para reavivar el Proyecto Nacional y Popular?

A modo de cierre, y como disparador de una posible agenda de discusiones colectivas desde la Economía Política, en función no sólo de recuperar lo hecho sino en repensar estrategias para el presente y el futuro, se proponen las siguientes preocupaciones estratégicas, producto de las varias discusiones colectivas que hemos podido construir desde diferentes ámbitos en la última década y que, desde la perspectiva de la Economía Social, debieran hacerse extensivas también como preocupaciones comunes del campo de la Economía Política, para la necesaria transformación de nuestra matriz económica productiva y de distribución en la Argentina.

10 Desafíos para una Economía inclusiva, solidaria y con justicia social

- 1. Una matriz productiva, distributiva** y de consumo de nuestra economía que contenga, reconozca y valore a la producción cooperativa y autogestionada y promueva un consumo responsable y soberano.
- 2. Un sistema normativo** impositivo, jurídico, sanitario y comercial que reconozca las particularidades e incluya a cooperativas, pequeños y medianos productores de bienes y servicios, con acciones coordinadas entre que el nivel nacional, provincial y municipal.
- 3. Un sistema nacional de logística y distribución de alimentos que defienda la soberanía alimentaria**, descentralizado con regulación público privada, promoviendo el abastecimiento local y regional, con normativas que la regulen y garanticen la **participación positiva de cooperativas y y medianos y pequeños productores regionales en las cadenas de valor** y en el acceso a los centros de consumo masivo, con rentabilidades equilibradas entre los distintos eslabones de la cadena productiva, de distribución y consumo.
- 4. Un Régimen laboral y de seguridad social integral**, que incluya a los trabajadores autogestionados, cooperativos y asociativos garantizando el acceso a derechos laborales en general y a la seguridad social de calidad en particular (riesgos del trabajo, atención de la salud, previsión social, salarios y condiciones de trabajo).
- 5. Un sistema de Financiamiento público productivo** para proyectos de desarrollo asociativo micro, meso y macro económico, con tasas de interés y costos administrativos subsidiados.

6. Un **Sistema de conocimiento, información, tecnología e innovación** que favorezca la inclusión en los procesos de agregado de valor a los productores de pequeños y medianos, potenciando su escala en términos asociativos.
7. Un **Sistema educativo** que promueva explícitamente, desde sus instancias formales, un acercamiento reflexivo hacia la economía, el mercado, la asociatividad como práctica de formación y trabajo, los valores cooperativos y solidarios en la economía y la valorización del trabajo en todas sus formas como fuente de generación de valor y riqueza social, entre otros aspectos.
8. Un **Sistema normativo federal de ordenamiento territorial** que garantice las condiciones de acceso a la tierra y demás activos productivos a los actores económicos locales (pequeños y medianos productores, cooperativas y pymes nacionales).
9. Una **coordinación Estatal de políticas socioeconómicas y/o de economía social, con eje en el Ministerio de Economía**, que atienda el desarrollo socioterritorial y promueva políticas integradas, con **espacios multiactorales público-privados** a nivel local y regional (Mesas, Consejos, etc) para la gestión asociativa de necesidades socioeconómicas, sus prioridades, y responsables y recursos.
10. **Espacios de comercialización de calidad para atender las necesidades del consumo popular y de los trabajadores y de las clases medias**, que democratizen el acceso de los consumidores a productos de calidad y a precios justos, y promuevan un consumo responsable y consciente del origen y proceso de trabajo incluido en los productos y servicios que se ofrecen en el mercado.

Referencias

Arancibia, Inés (2015) "Ensayo sobre algunos dilemas de la comercialización desde la perspectiva de la economía social", Revista OSERA del Observatorio Social sobre Empresas Recuperadas y Autogestionadas, N°12, Segundo Semestre 2015, disponible en <http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/osera/article/view/1402>

CTA, Espacio de Economía Social, (2009) Trabajo Autogestionado y Organización Política. Reflexiones sobre la potencialidad del Trabajo Autogestionado en la Economía Argentina, CTA Ediciones. Disponible en http://archivo.cta.org.ar/IMG/pdf/Trabajo_autogestionado-3.pdf.

Danani, Claudia (2016) "Las políticas públicas del área de desarrollo social durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández", Revista ANÁLISIS N° 12 – 2016, Fundación Fiedrich Ebert Stiftung Argentina.

(https://www.researchgate.net/publication/308962208_Las_politicas_publicas_del_area_de_desarrollo_social_durante_los_gobiernos_de_Nestor_Kirchner_y_Cristina_Fernandez_A_N_A_L_I_S_I_S_N_12_-_2016?ev=prf_high)

Putero, Lorena y Contreras, Juan Cruz (2016) "Entre la inclusión y la lógica de mercado. Análisis preliminar de las políticas públicas sobre Economía Social en el periodo 2003-2015", TERCER CONGRESO DE ECONOMÍA POLÍTICA, Hacia una teoría económica latinoamericana, 3, 4 y 5 de OCTUBRE 2016.

Ruggieri y otros (2016) "Las empresas recuperadas por los trabajadores en los comienzos del gobierno de Mauricio Macri", Programa Facultad Abierta, ESTADO DE SITUACIÓN A MAYO DE 2016. <http://www.idelcoop.org.ar/sites/www.idelcoop.org.ar/files/revista/articulos/pdf/reflexiones-01.pdf>

Documentos web

Informe del Ministerio de Desarrollo Social ante Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas. <http://enaun.mrecic.gov.ar/node/5121>.

LA MACROECONOMIA ARGENTINA, DICIEMBRE 2012, Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo, <http://www.mecon.gov.ar/basehome/pdf/indicadores.pdf>

RUESS, Red Universitaria de Economía Social y Solidaria, www.ruess.com.ar

INAES, <http://www.inaes.gob.ar/Entidades/BuscarEntidades>